



Alumnos de 2º de Bachillerato preparan la Selectividad en un colegio de Madrid. JESÚS HELLIN / EUROPA PRESS

La guerra de las ratios: docentes contra CCAA en la vuelta a clase

Malestar sindical con Celaá porque no obliga a los consejeros a bajar los alumnos por aula

OLGA R. SANMARTÍN MADRID

En la planificación de la vuelta a las aulas para septiembre, hay una pugna abierta entre profesores y gobiernos autonómicos a cuenta del protocolo de seguridad contra el Covid-19. Los primeros exigen que se reduzca el número de alumnos por aula para prevenir posibles contagios. Los segundos advierten que esta medida implicará crear nuevos grupos, habilitar otros espacios y contratar a más personal, con las dificultades organizativas y presupuestarias que todo eso conlleva. Entre medias está la ministra Isabel Celaá, que ha tratado de conjugar los intereses de ambos, pero que, tras su reunión del jueves con los consejeros autonómicos, ha desatado la rebelión de los docentes. Es la guerra de las ratios.

Los sindicatos cuentan que han asistido «estufefactos» esta semana a la relajación de Celaá en cuanto a

distancia interpersonal (de dos a 1,5 metros); alumnos por profesor (de 15 a 20); uso de mascarillas (excluidos los menores de 10 años) y asistencia de todos los críos al colegio (ya no habrá semipresencialidad). Acusan a la ministra de «haber cedido a las presiones autonómicas» y de no garantizar un nuevo curso «en plenas condiciones de seguridad».

Sobre todo porque la reducción de alumnos por aula ha quedado en el aire. La propia Celaá dijo el jueves, tras la Conferencia Sectorial, que las ratios van a seguir siendo las mismas porque son las que marca la ley: «25, 30 y 35 alumnos (según las etapas)». Aseguró que lo que plantea —recalando mucho que es una recomendación que no obliga a nada a las CCAA— son «grupos estables de convivencia» de un máximo de 20 alumnos a cargo de un adulto. Los «grupos» son un eufemismo para evitar

mencionar las «ratios», una palabra tabú que causa rechazo a las CCAA.

«Nos da igual como lo llame, si ratios o grupos de convivencia», expresa Maribel Loranca, de UGT. «Lo que nos tememos es que en el protocolo que el Gobierno se ha comprometido a trabajar con las CCAA se rebajen medidas de seguridad, como las ratios. Nos preocupa que se pretenda volver a la normalidad a los centros educativos con un coste mínimo».

El trasfondo de la guerra es económico. Si los grupos de alumnos se reducen, hay que contratar a más profesores. El Gobierno ha puesto sobre la mesa 2.000 millones de euros a repartir con las universidades. Los sindicatos calculan que harían falta entre 3.600 y 5.000 millones, así que no da con el dinero del Estado. Las autonomías tendrán que poner más.

UGT, CCOO, STES, CSIF y Anpe están muy molestos con la ministra. Quieren que «blinde» la bajada de ratios en la ley, de la misma forma que ha hecho el Gobierno con la distancia interpersonal de 1,5 metros: incluyéndola en un real decreto de obligado cumplimiento para todos. «Distancia y ratios deben conjugar-

se a la hora de volver a las aulas. «El acuerdo de Celaá con 15 consejeros ha sido de muy pocas cosas y debería haber una regulación clara», advierte Francisco García, de CCOO. Su opinión es que «las condiciones de seguridad deben ser iguales para todos en este país, con criterios que

sean aplicables por el conjunto de las autonomías». Es lo mismo que dice Mario Gutiérrez, de CSIF. La guerra de las ratios ha unido los sentires de todos los sindicatos.

«El profesorado quiere tener certezas, estamos muy preocupados. ¿Por qué los alumnos menores de 10 años no tienen que cumplir la distancia social y los mayores sí?», pregunta Nicolás Fernández Guisado, de Anpe.

Más duro se muestra José Ramón Merino, de STES, que reprocha a Celaá su «incoherencia», sus «vaivenes» y su «falta de liderazgo». «La ministra dice una cosa y al día siguiente otra. La Conferencia Sectorial ha sido decepcionante y el Gobierno se ha lavado las manos, pasándole la responsabilidad a las autonomías, que, a su vez, las van a derivar a los centros. La responsabilidad va en el cargo».

RECADO DE LOS RECTORES A CASTELLS

Diferencias. El presidente de la Crue, José Carlos Gómez Villamandos, replicó ayer al ministro Manuel Castells que no puede renunciar a la presencialidad, sobre todo en la docencia práctica. Castells, a diferencia de Celaá, apuesta por un sistema de turnos rotatorios: unos alumnos en casa y otros en clase. Pero los rectores se oponen. «No puede ser que el primer contacto del alumno con la universidad sea telemático», avisó José Carlos Gómez Villamandos.